



Informe nº 83/2020

ASUNTO: PROYECTO DE DECRETO DE LA CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLITICA SOCIAL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS REGULADORAS DE LAS AYUDAS INDIVIDUALES A FAMILIAS NUMEROSAS DE CATEGORÍA ESPECIAL, A FAMILIAS CON HIJAS E HIJOS NACIDOS DE PARTO MÚLTIPLE Y A FAMILIAS MONOPARENTALES.

ÓRGANO CONSULTANTE: CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLITICA SOCIAL.

INFORME

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social ha remitido el pasado 11-08-2020 a esta Dirección de los Servicios Jurídicos el expediente relativo al *“Proyecto de Decreto por el que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, a familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y a familias monoparentales”*, para la emisión de informe preceptivo que establece el art. 7.1.f) de la Ley 2004, de 22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma.

Consta en el expediente remitido la siguiente documentación:





- Texto del proyecto versión de 4 de junio de 2020.
- Memoria de Análisis de Impacto Normativo, de fecha 4 de junio de 2020
- Propuesta del Centro Directivo competente por razón de la materia de fecha 4 de junio de 2020.
- Certificado de la Secretaria del Pleno del Consejo Asesor Regional de Infancia y Familia, en sesión del día diez de junio de dos mil veinte.
- Certificado de la Secretaria del Pleno del Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales, en sesión del día diez de junio de dos mil veinte.
- Texto del proyecto versión de 15 de junio de 2020.
- Memoria de Análisis de Impacto Normativo, de fecha 17 de junio de 2020.
- Informe del Servicio Jurídico de la Vicesecretaria de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política social, de 17 de junio de 2020.
- Dictamen de 28 de julio de 2020 del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
- Informe de 5 de agosto de 2020 de la Dirección General de Familias y Protección de Menores en relación al Dictamen del CESRM.
- 3ª Memoria de Análisis de Impacto Normativo, de fecha 5 de agosto de 2020.
- Texto del proyecto versión de 5 de agosto de 2020.





La remisión de la documentación citada se hizo con el propósito de recabar el informe de esta Dirección de los Servicios Jurídicos, según se especifica en la comunicación interior dirigida al mismo (nº de salida 232410/2020), y acompañando las correspondientes Memorias de Análisis Normativo.

En relación con la citada solicitud de informe, el artículo 21 del Decreto 77/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley de Asistencia Jurídica, establece que la consulta se acompañará de los antecedentes de todo orden que puedan influir en el dictamen y de una copia compulsada del expediente administrativo completo, debidamente foliado, con índice inicial de los documentos que contiene, extremo que se entiende adverbado y cumplimentado por la remitente.

En sus apartados 1 y 2, el citado artículo 21, señala que se entenderá que el expediente administrativo se remite completo cuando consten en el mismo, entre otros documentos, la copia autorizada del texto definitivo de la propuesta del acto o proyecto de disposición general que constituya su objeto, así como todos los antecedentes que puedan influir en el dictamen

No se observa en el expediente trasladado haberse dado cumplimiento a la preceptiva **publicación de la normativa**, y de su correspondiente memoria de análisis normativo, en el Portal de Transparencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ni se certifica asimismo la consecuencia de las posibles alegaciones al trámite de audiencia e información pública, que pudieran derivarse de la pública consulta del texto en el correspondiente portal de registro de la administración autonómica, si





bien tal omisión viene **justificada por razones de interés público** en relación a la pronta resolución del procedimiento de aprobación del presente Decreto y el especial contexto provocado por el COVID'19.

Al respecto de lo expuesto cabe recordar que el artículo 133 de la LPAC, en la pequeña parte que resulta de aplicación a las Comunidades Autónomas a tenor de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2018, señala que “[con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de... reglamento se sustanciará una consulta pública” (inciso inicial de su apartado 1), y que “[podrá prescindirse de los trámites de consulta... previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurren razones graves de interés público que lo justifiquen”.

Así, el contenido del presente proyecto de Decreto, como el contexto temporal y sociológico del mismo parece justificar la concurrencia de esas “*graves razones de interés público*”, y por ende que se haya querido tramitar el Decreto con carácter urgente.

En relación con lo anterior, y en el ámbito autonómico, hemos de tener en cuenta que, encontrándonos ante una disposición de carácter general que ha de requerir la aprobación del Consejo de Gobierno, debe seguirse para su tramitación el procedimiento de elaboración de los reglamentos se encuentra regulado en el artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,





disponiendo dicha norma, entre otros aspectos de regulación, que la iniciación del procedimiento, que se llevará a cabo a través de la oportuna propuesta dirigida al consejero (*páginas 20 a 30 del expediente remitido*), deberá ir acompañada de la exposición de motivos y una memoria de análisis normativo que incluirá en un único documento el contenido establecido en el artº 46.3 de la Ley 6/2004 (*páginas 9 a 19 del expediente remitido*), siendo que dicho artículo establece en el primero de sus apartados, y en relación al contenido de la MAIN, la necesidad de la adecuación de la norma a los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, **transparencia** (*si bien intencional y justificadamente omitida en el presente caso*) accesibilidad, simplicidad y eficacia, así como la justificación de la competencia de la Comunidad Autónoma para su aprobación.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Conforme consta en el expediente remitido, con fecha de 04-06-2020, el Director General de Familias y Protección de Menores propone a la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social la tramitación por el procedimiento de urgencia de un Proyecto de Decreto por el que se establezcan las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales de la Región de Murcia

SEGUNDO.- Con fecha 17-06-2020 se emite Informe Jurídico de la Secretaría General, que se incorporó al expediente y que da cuenta de los antecedentes y que, tras las consideraciones jurídicas que consideró procedentes – *entre las que cabe destacar las relativas a deslindar la*





naturaleza jurídica de las ayudas a conceder respecto de la figura de las subvenciones- llevó a cabo un pormenorizado examen de los artículos incluidos en el texto remitido, concluyendo con su parecer favorable al citado texto.

TERCERO.- Posteriormente se incorpora el prolijo y detallado Dictamen del Consejo Económico y Social de 28-07-2020, del que destacamos el importante esfuerzo realizado por delimitar los mecanismos asistenciales incluidos en la **Ley 3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma.**

Dicho Dictamen es objeto de análisis por el Informe de 5 de agosto de 2020 de la Dirección General de Familias y Protección de Menores, en el que se realizan manifestaciones acerca de si la naturaleza jurídica de las ayudas responde al concepto de prestaciones asistenciales o "subvenciones impropias", y asimismo plantea un eventual desacuerdo sobre el fundamento para la protección de las familias numerosas, (*cuestión que por otra parte admite numerosos puntos de vista y no empece el resultado pretendido*)

A la vista de los citados antecedentes procede realizar las siguientes:

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- OBJETO





El Proyecto de Decreto que se informa tiene por objeto establecer es establecer las normas reguladoras para la concesión de ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales, que se van a convocar este año en la Región de Murcia por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

SEGUNDA.- TITULO COMPETENCIAL

Los servicios sociales se pueden definir como el conjunto de políticas públicas dirigidas a auxiliar, con cargo a los fondos generales del Estado o de la Comunidades Autónomas a aquellos sujetos que no se encuentren en condiciones de atender por sí mismos necesidades básicas.

La Ley General de la Seguridad Social se refiere a ellos en los artículos siguientes:

- **El art. 42 LGSS** hace referencia a la acción protectora del Sistema de Seguridad Social y establece que como complemento de las prestaciones contributivas se podrán otorgar los beneficios de la *asistencia social*

- *Cualquier otra prestación de carácter público que tenga por finalidad complementar las prestaciones de seguridad social del nivel contributivo, forman parte del sistema de Seguridad Social* y se someten a los principios del art. 2 LGSS (universalidad, unidad, solidaridad e igualdad). Y ello “sin perjuicio de las **ayudas de otra naturaleza** que, en el





ejercicio de sus competencias, **puedan establecer las Comunidades Autónomas** en beneficio de los pensionistas residentes en ella.”

Específicamente, la LGSS dedica los arts. 63 a “Los Servicios Sociales” y los arts. 64 y 65 a “La asistencia social”.

Los servicios sociales son un conjunto de instituciones que tienen por objeto complementar las prestaciones de Seguridad Social procurando una mejora de la calidad de vida. La LGSS no define los servicios sociales, sino que se limita a configurar su objeto y luego enumerar los previstos la misma, dejando abierta la posibilidad de crear otros. En concreto La ley reconoce el derecho a los incapacitados para el trabajo a la *reeducación y rehabilitación*. Igualmente se reconoce el derecho de los discapacitados a beneficiarse de la prestación de *recuperación profesional* conforme a la normativa reglamentaria.

La Asistencia Social se define en el **art. 64** como *“los servicios y auxilios económicos para los trabajadores y familiares o asimilados que, en atención a estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos, previa demostración, salvo en los casos de urgencia, de que el interesado carece de los recursos indispensables para hacer frente a tales estados o situaciones”* [...] La asistencia social podrá ser concedida por las Entidades Gestoras con el límite de los recursos consignados a este fin en los presupuestos correspondientes, sin que los servicios o auxilios económicos otorgados puedan comprometer recursos del ejercicio económico siguiente a aquel en que tenga lugar la concesión”.





El **art. 65** fija el contenido de las ayudas asistenciales estableciendo que “comprenderán, entre otras, las que se dispensen por tratamientos o *intervenciones especiales*, en casos de carácter excepcional, por un determinado facultativo o en determinada institución; por *pérdida de ingresos* como consecuencia de la rotura fortuita de aparatos de prótesis, y cualesquiera otras análogas cuya percepción no esté regulada en esta ley ni en las normas específicas aplicables a los Regímenes Especiales”. Se trata de un catálogo abierto, no se fija un contenido cerrado.

Los servicios sociales y la asistencia social están ubicados constitucionalmente dentro de los Principios Rectores de la Política Social y Económica, **artículos 41, 49 y 50 CE**. En cuanto a la competencia en relación con los mismos, tiene una doble vertiente:

- Por una parte, en base al **art.149.1.17 CE**, la legislación básica y el régimen económico serán competencia exclusiva del Estado, y la ejecución de la asistencia social se llevará a cabo por los servicios de las CCAA tras la transferencia operada a través del IMSERSO

- El **art.148.1.20 CE** dispone que las CCAA pueden asumir competencias en materia de asistencia social, así se ha producido mediante el reconocimiento de rentas mínimas, o ingresos mínimos de solidaridad

Estas referencias constitucionales son útiles para delimitar el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas porque ha sido el Tribunal Constitucional quien ha delimitado las posibilidades autonómicas en esta materia, para ello el Tribunal ha declarado que de la





legislación vigente se deduce la existencia de una asistencia social externa al Sistema de Seguridad Social, y no integrada en él, a la que ha de entenderse hecha la remisión contenida en el art.148.1.20 CE y, por tanto, competencia posible de las Comunidades Autónomas (Sentencia TC 76/1986, 9 de junio y 239/2002, de 11 diciembre).

Consecuentemente el sistema se dibuja de la siguiente manera:

1. Existe una **asistencia social interna** al Sistema de Seguridad Social sobre la que al Estado le corresponde la legislación básica y el régimen económico, y sin perjuicio de las potestades de gestión y ejecución de sus servicios a través de la CCAA (**Art.1491.17 CE**)

2. Existe también una **asistencia social externa**, *en cuanto asistencia social prestada por las CCAA* en el ejercicio de la competencia otorgada en el **art.148.1.20 CE**. En desarrollo del mismo y al amparo de los Estatutos de Autonomía, las CCAA han dictado leyes por las que se desarrollan los servicios sociales propios. Estos servicios sociales o asistencia social no forman parte del Sistema de Seguridad Social en cuanto protección mínima, general y obligatoria, sino que deberá ser externa al Sistema.

Ambos mecanismos de protección no son excluyentes sino complementarios. El Reglamento Comunitario 1242/1992 se refiere a las medidas asistenciales del Estado para exigir que “sea un derecho subjetivo perfecto y que sea efectiva en todo el territorio nacional”. Esta exigencia produjo problemas cuando algunas Comunidades Autónomas con cargo a sus presupuestos complementaron las pensiones del Sistema con cantidades





adicionales, planteándose por el Gobierno de la Nación unos conflictos positivos de competencia (*en concreto, frente a Andalucía*) ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal entendió *que se trata de medidas de asistencia social que vienen a complementar las prestaciones del Estado ante una situación de necesidad, sin interferir en el régimen jurídico básico de la Seguridad Social ni en su régimen económico*. El TC habilitaba, no obstante, al Estado a *adoptar dentro de los títulos competenciales las medidas que resulten convenientes para evitar los posibles efectos disfuncionales que pudieran producirse en dicho sistema como consecuencia de la acción normativa de las Comunidades Autónomas*.

TERCERA.- FORMA

La disposición que se somete a informe es un proyecto de decreto, justificándose dicha forma en que se trata de una norma de carácter reglamentario, por lo que el órgano competente para su aprobación es el Consejo de Gobierno, de conformidad con el artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así como con los artículos 21.1, 22.12 y 52.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que atribuyen a dicho órgano el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias no reservadas por el Estatuto de Autonomía a la competencia legislativa de la Asamblea Regional, o salvo en los casos, en que ésta se encuentre específicamente atribuida al Presidente de la Comunidad Autónoma o a los Consejeros.

Asimismo, se cumple con la exigencia formal establecida por el artículo 25.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y





Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que determina que adoptará la forma de Decreto, las disposiciones de carácter general, así como los actos emanados del Consejo de Gobierno, para los que estuviera expresamente prevista esta forma.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN

Teniendo en cuenta que nos encontramos ante una disposición administrativa de carácter general que debe aprobar el Consejo de Gobierno, la tramitación del presente expediente habrá de seguirse conforme al procedimiento de elaboración de los reglamentos previsto en el artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia

Dicho artículo 53 de la Ley 6/2004, dispone que la iniciación del procedimiento se llevará a cabo, a través de la oportuna propuesta dirigida al Consejero, por el órgano directivo de su departamento competente por razón de la materia, mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, al que se acompañarán la exposición de motivos y una memoria de análisis de impacto normativo, que incluirá en un único documento el contenido establecido en el apartado tercero del artículo 46. El contenido de la memoria de análisis de impacto normativo, se desarrolla en el referido artículo y en la Guía Metodológica para su elaboración, que ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno en fecha 6 de febrero de 2015, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, habiendo sido publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en fecha 20 de febrero de 2015, mediante Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría General de





la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el BORM, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de febrero de 2015, por el que se aprueba la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.

Además, sigue indicando el referido precepto, que a lo largo del proceso de elaboración del proyecto deberá recabarse el informe jurídico de la Vicesecretaría de la Consejería proponente y aquellos otros informes, consultas y aprobaciones previas que tengan carácter preceptivo (*En el presente caso, recogidos en las páginas 63 a 121 del expediente*)

Por su parte, el número 3 de este mismo artículo establece que, una vez elaborado el texto de un proyecto de disposición general que afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, el órgano directivo impulsor lo someterá al trámite de audiencia, bien directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas que los representen, extremo que –nuevamente insistimos- **ha sido obviado**, en consonancia con la tramitación de carácter urgente y entendiendo justificada la concurrencia de razones de interés público que habilitan la omisión del trámite.

Cabe señalar que la elaboración de la disposición ha sido, en esencia, respetuosa con el procedimiento.

En el expediente remitido consta asimismo la MEMORIA ABREVIADA DE ANALISIS DE IMPACTO NORMATIVO (MAIN), realizada por tres ocasiones y a resultas de los sucesivos trámites consultivos devengados en la tramitación del expediente, debiendo hacer constar, tal y





como ya puso de manifiesto el Consejo Jurídico de la Región de Murcia en su dictamen 290/19, entre otros, la previsión establecida en la Guía Metodológica para su elaboración, aprobada por el Consejo de Gobierno en fecha 6 de febrero de 2015, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, que, si bien es cierto que establece que no resulta necesario elaborar MAIN intermedias cuando, aunque se formulen observaciones o sugerencias por órganos informantes o con ocasión del trámite de audiencia, ello no determine una alteración del Proyecto, siendo con ocasión de la MAIN definitiva, que se elabora al final de la tramitación, y con carácter previo a la remisión del Proyecto para su aprobación al órgano competente, cuando se incorpore la referencia a dichos trámites y la forma o medida en que tales observaciones o sugerencias ha sido tomadas en consideración.

Dejando a salvo las apreciaciones reflejadas en el Informe Jurídico de la Secretaría General, respecto de las que dejamos constancia de nuestra conformidad, entendemos que resultan correctos los elementos relativos a la tramitación de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.

Al respecto de lo anterior hemos de exponer que de conformidad con el artículo 26.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno tal y como ha sido modificada por la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Este documento esencial en la elaboración de toda disposición normativa encuentra su regulación desarrollada en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio.





La Memoria del Análisis de Impacto Normativo se configura en su normativa reguladora como un proceso continuo, que debe redactarse desde el inicio hasta la finalización de la elaboración del proyecto normativo, de manera que su contenido se vaya actualizando con las novedades significativas que se produzcan a lo largo del procedimiento de tramitación (art. 2.3 del Real Decreto 1083/2009) hasta culminar con una versión definitiva (*recogida en el presente caso en las páginas 122 a 140 del expediente*) Desde dicha perspectiva, pueda afirmarse el ajuste de la Memoria a la naturaleza que le es propia, que es la de un proceso continuo que debe redactarse desde el inicio hasta la finalización de la elaboración del proyecto normativo (art. 2.3 del Real Decreto 1083/2009).

QUINTA.- OBSERVACIONES AL TEXTO DEL PROYECTO DE DECRETO

A.- Contenido del Proyecto de Decreto

Consta de un preámbulo, doce artículos, una disposición derogatoria y una disposición final.

El preámbulo se inicia con las referencias normativas que atribuyen las competencias relativas a la promoción, protección y apoyo a las familias e infancia, incluida la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos específicos en estas materias a la Dirección General de Familias y Protección de Menores de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.





Se cita asimismo el **Dictamen nº 189/2006 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia**, sobre la diferente naturaleza de las subvenciones y las ayudas, incardinadas en el terreno de los prestaciones asistenciales en los que predomina lo protección del individuo ante situaciones específicas de necesidad. Así, no siendo de aplicación a estas ayudas la normativa reguladora de las subvenciones se hace necesario establecer las normas reguladoras y el procedimiento de concesión de las mismas

B.- Análisis Parte Dispositiva

El artículo 1 enmarca el objeto de la regulación del Proyecto de Decreto, que a la sazón es plenamente coincidente con su título, y después pasa a fijar los conceptos de familia y familia monoparental a los efectos del mismo.

Hemos de valorar positivamente la ampliación del ámbito de aplicación del Decreto, incluyendo como nuevo colectivo beneficiario a las familias monoparentales, entendiendo por tales las integradas por un ascendiente con uno o más hijos e hijas

El artículo 2 define las ayudas objeto de regulación como aportaciones económicas no periódicas que se otorgan por una sola vez durante el ejercicio económico a las familias ya definidas en el artículo anterior y con la finalidad de sufragar gastos derivados de su composición y características.

El artículo 3 enumera los requisitos generales para ser beneficiarios de las ayudas. Merece la pena detenernos en el **apartado 3.2**, pues delimita





negativamente el derecho a ser beneficiario, exponiendo que para tener dicha condición, no se debe tener acceso a otras ayudas de **análoga naturaleza**.

Parece claro que las ayudas de “análoga naturaleza” no son ninguna de las expuestas en el **artículo 6**, pues de lo contrario no se entraría al detalle de entender que no computan a efectos de los ingresos de la familia, sino que su percepción daría lugar a la inmediata exclusión de la ayuda regulada en el presente Decreto.

No obstante, y en relación a la delimitación de que ayudas en concreto pueden determinar la eventual denegación de las ayudas reguladas en el Decreto cuyo anteproyecto se informa, pueden ser de utilidad las consideraciones vertidas en el **Dictamen de 28 de julio de 2020 del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia**.

El artículo 4 determina que los beneficiarios de estas ayudas han cumplir alguno de los requisitos en ese artículo dictados.

El artículo 5 lleva a cabo una remisión a la convocatoria para la determinación de las clases, concepto, cuantía máxima, plazo, forma y documentación para la justificación del destino de las ayudas.

El artículo 6 estipula que, a efectos de la valoración de la cuantía de las ayudas, el cómputo de los ingresos de la familia se realizará teniendo en cuenta la Base imponible resultante en el último ejercicio fiscal de todos los miembros de la familia, ascendientes y descendientes que residan en el mismo domicilio.





Por lo tanto, configura a los distintos miembros de la familia como miembros de una “Unidad Económica de Convivencia” y parte de la suma de sus ingresos para después dividir esa cantidad por el número de integrantes.

Merece especial atención el **apartado nº 4 de este artículo 6**, pues establece las exclusiones a los efectos del antedicho cálculo de ingresos, evidenciando esta enumeración el carácter aperturista de las ayudas que se pretenden conceder, y siendo coherente con la situación económico social vigente en el contexto del COVID´19, excluye de la posibilidad de concurrencia un total de once conceptos retributivos, que incluyen tanto pensiones (contributivas y no contributivas), subsidios, rentas y ayudas de diversa índole y procedencia (I.N.S.S., I.M.A.S., S.E.P.E...) culminando el listado con una cláusula que habilita el “numerus apertus” de las percepciones no computables a efectos de las ayudas.

Debe destacarse el acierto de incluir expresamente en el listado el **Ingreso Mínimo Vital**, pues al tratarse de una prestación de muy reciente creación, existen numerosas dudas acerca de su eventual compatibilidad y concurrencia con otras prestaciones.

El artículo 7 regula los requisitos, forma y plazos de presentación de la solicitud de las ayudas.





El artículo 8 atribuye la competencia para la instrucción del procedimiento Servicio competente en materia de promoción y protección de las familias, y asimismo diferencia tres fases en el procedimiento.

El artículo 9 dispone que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, sentido oportunamente coincidente con el de la actual Ley 39/2015.

El artículo 10 prescribe que las familias beneficiarias tienen la obligación de comunicar a la Consejería competente en materia de promoción y protección de las familias la obtención de ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado.

Tal comunicación es indudablemente de trascendencia a los efectos de los **artículos 3.2 y 6.4**, y su ausencia ha de ser complementada con la necesaria actuación de comprobación por parte de esta Administración concedente (apartado 2) y la eventual devolución, analizada en el artículo siguiente.

El artículo 11 enumera como causas de devolución de las ayudas las de incumplimiento de la finalidad (*al igual que acontece con las subvenciones*), la obtención previa de otras ayudas análogas (*lo que redundaría en la incompatibilidad del artículo 3.2*) y la alteración, ocultamiento o





falseamiento de datos o circunstancias que habiliten para su concesión
(*causa común en la denegación de cualquier prestación o social o pensión,
sea contributiva o no contributiva*)

El artículo 12 prevé que toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras administraciones o entes públicos, privados o concertados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la orden de concesión.

Este precepto acerca nuevamente a estas ayudas al régimen jurídico de las **subvenciones** y justifica que a lo largo del expediente se hayan delimitado una y otra figuras.

La disposición derogatoria única dispone la derogación de la Orden de 14 de noviembre de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias con hijos nacidos de parto múltiple y a familias numerosas de categoría especial con 6 o más hijos

La disposición final única fija en el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la entrada en vigor del presente decreto.





CONCLUSIÓN

En atención a los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas y salvo mejor opinión fundada en derecho, se emite por parte de esta Dirección de los Servicios Jurídicos informe favorable al “Proyecto de Decreto por el que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, a familias con hijas e hijos nacidos de parto múltiple y a familias monoparentales”.

No resulta necesaria la remisión con carácter preceptivo al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tal y como establece la citada MAIN así como el informe preceptivo del Servicio Jurídico de la Vicesecretaría de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de 17 de junio de 2020.

Vº Bº
EL DIRECTOR

EL LETRADO

Joaquín Rocamora Manteca

Miguel Ángel Hernández Rubio

(Documento firmado electrónicamente)

